



Reserva Ecológica
Cotacachi
Cayapas

Centro de Visitantes

AIBR
Revista de Antropología
Iberoamericana
www.aibr.org
Volumen 18
Número 1
Enero - Abril 2023
Pp. 41 - 65

Madrid: Antropólogos
Iberoamericanos en Red.
ISSN: 1695-9752
E-ISSN: 1578-9705

El proceso participativo en el turismo rural comunitario: Un análisis etnográfico

Jordi Gascón

Departamento de Antropología Social. Universitat de Barcelona
jordigascon@ub.edu

Recibido: 05.02.2021

Aceptado: 05.01.2022

DOI: 10.11156/aibr.180103



RESUMEN

El Turismo Rural Comunitario (TRC) se ha presentado como un instrumento eficaz para contribuir al sostenimiento de las economías campesinas e indígenas. Pero una investigación crítica también ha identificado riesgos que pueden incrementar la vulnerabilidad de las sociedades anfitrionas. Estos análisis se han centrado en el impacto económico, sociocultural o medioambiental. Menos interés ha generado el papel de la población local en el diseño e implementación de las propuestas turísticas. A partir de un caso etnográfico (Valle de Manduriacos, Ecuador), el artículo se pregunta bajo qué condiciones los procesos participativos permiten que los proyectos en TRC asuman los intereses y deseos de la población local, o cuándo son solo un ejercicio vacío de contenido destinado a legitimar los objetivos de las agencias financiadoras. El caso del Valle de Manduriacos descubre que los procesos participativos funcionan cuando se dan dos factores. Por un lado, como refleja la bibliografía sobre procesos participativos, cuando la población local cuenta con capital social y estructuras organizativas sólidas. Pero también es necesario que conozca con cierta profundidad el funcionamiento del sector de intervención; en este caso, el sector turístico.

PALABRAS CLAVE

Turismo Rural Comunitario, procesos participativos, resiliencia socioecológica, Cooperación al Desarrollo, Ecuador.

THE PARTICIPATORY PROCESS IN COMMUNITY BASED TOURISM: AN ETHNOGRAPHIC ANALYSIS

ABSTRACT

Community Based Tourism (CBT) has been proposed as an effective instrument to contribute to the conservation of natural areas and the sustainability of rural and indigenous economies. However, risks that may increase the vulnerability of host societies have also been identified. These critical analyses have focused on economic, socio-cultural or environmental impact. The role of the local population in the design and implementation of tourism proposals has not generated as much interest. This article asks under what conditions participatory processes allow CBT projects to assume the interests and desires of the local population, or when they are only an empty exercise aimed at legitimizing the objectives of funding agencies. The analysis of an ethnographic case (Valle de Manduriacos, Ecuador) finds that participatory processes work when two factors are present. On the one hand — as the literature on participatory processes states — when the local population has social capital and solid organizational structures. But also when they know how the sector of intervention works — the tourism sector.

KEY WORDS

Community Based Tourism, participatory approach, social-ecological resilience, Development Cooperation, Ecuador.

Agradecimientos

El presente trabajo ha recibido el apoyo del proyecto «Turismo de base local y resiliencia socio-ecológica» (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Estado Español. Ref. CSO2017-84893-P).

Introducción

Scheyvens (2007) afirma que la historia del turismo como sector de la cooperación al desarrollo no se inició hasta la década de 1990. Anteriormente se dudaba de su capacidad para combatir la pobreza. Aún más, se pensaba que el turismo podía incrementar la exclusión de los sectores más vulnerables. El surgimiento de metodologías como Pro-Poor Tourism o el ingreso de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) en el sistema de Naciones Unidas ayudaron a legitimar el turismo como sector de la cooperación. De hecho, tuvo un crecimiento exponencial a partir de la década de 2000 (Spenceley y Mayer, 2012).

El Turismo Rural Comunitario (TRC) o de Base Local suele aparecer como el modelo paradigmático de la cooperación en turismo (Gascón, Morales y Tresserras, 2013). Se trata de un modelo turístico de pequeño formato, establecido en zonas rurales y en el que la población local, a través de sus estructuras organizativas, ejerce un papel significativo en su control y gestión (Gascón y Cañada, 2005). El TRC apareció como un instrumento apropiado para la cooperación en la confianza de que podía coadyuvar a la conservación de espacios naturales y al sostenimiento de las economías campesinas e indígenas (Morales Morgado, 2006; Ruiz-Ballesteros, 2015; Wearing, McDonald y Ponting, 2005). En el Área Andina, donde se circunscribe el caso que se analizará en el presente texto, aparecieron experiencias de turismo rural comunitario de forma autónoma, sin apoyo externo, en periodos tan recientes como la década de 1970 (Gascón, 2005; Zorn y Farthing, 2007). Esto sucedía, especialmente, cuando la población se encontraba cerca de algún circuito turístico convencional. Pero será a partir de la década de 2000 cuando surgen propuestas impulsadas por diferentes agentes de cooperación. A principios de la década de 2010, Pérez Galán y Asensio (2012: 3) hablaban de *«una auténtica fiebre por esta herramienta como potencial recurso para mejorar el nivel de vida de las poblaciones rurales»*.

En ocasiones, se ha afirmado que la consolidación del turismo como sector de la cooperación al desarrollo se ha basado en apriorismos. Uno de ellos es el convencimiento de que solo consiste en aplicar algunos instrumentos que permitan incrementar los ingresos monetarios netos a la población beneficiaria. Pero el turismo, aunque suponga una nueva fuen-

te de ingresos, también puede aumentar la vulnerabilidad de la población local (Faria e Hidalgo, 2012; Gascón, 2015). Con relación al TRC, algunas se empezaron a vislumbrar a partir de la década de 2000. Entre ellas, que un porcentaje muy elevado de los proyectos tendían a fracasar por falta de viabilidad (Notzke, 2006; Zielinski, Kim, Botero y Yanes, 2020). En ocasiones, se infravaloraban las constricciones estructurales de la industria turística, que dificultan o impiden el control efectivo de la actividad por parte de la población local (Blackstock, 2005; Lacher y Nepal, 2010). También se observó que el TRC podía incrementar la diferenciación social y convertirse en el eje de la conflictividad intracomunitaria (Gascón, 2005; Tucker, 2010). O que podía impulsar la mercantilización de los recursos naturales (Fletcher, 2009; Wieckardt, Koot y Karimasari, 2022).

Estos discursos muestran que la mayor parte de la investigación sobre el TRC se ha centrado en el análisis de su impacto económico, sociocultural o medioambiental. Menos interés ha generado el papel de la población local en el diseño e implementación de estas propuestas turísticas, aun cuando la cooperación al desarrollo considera esencial la aplicación de procesos participativos desde la década de 1980 (Elbers, Knippenberg y Schulpen, 2014; Gizelis y Kosek, 2005). En esa línea, era habitual que los manuales de TRC y ecoturismo, que se multiplicaron en la década de 2000, enfatizasen la necesidad de que los proyectos de TRC fueran resultado de tales procesos (e.g. Báez y Acuña, 2003; Lash y Austin 2003; WWF, 2001). Diferentes autores destacan que la participación local no solo se debe a un principio de ética democrática o para asegurar una mejor distribución de los beneficios (Michael, Mgonja y Backman, 2013). También a razones pragmáticas: la viabilidad de un proyecto de TRC se reduce cuando la población meta no se ha apropiado de él desde su diseño (Matarrita-Cascante, 2010; Setiyorini, Andari, R y Masunah, 2019).

Sin embargo, el funcionamiento de esos procesos participativos ha sido escasamente estudiado. Algún autor se ha preguntado si la participación local es un elemento valorado por parte de los clientes a la hora de escoger un destino de turismo rural (Rasoolimanesh, Ringle, Jaafar y Ramayah, 2017). Pero la mayor parte de los pocos trabajos que han tratado el tema se han preocupado por la efectividad de los procesos participativos. Generalmente han descubierto que, muchas veces, son testimoniales: más allá del capital social que pueda tener la población local o de la existencia de estructuras comunitarias de gestión, el desconocimiento de la lógica y funcionamiento del nuevo sector económico facilita que los expertos y técnicos del proyecto, en ocasiones inconscientemente, acaben imponiendo sus percepciones y propuestas (Bello, Lovelock y Carr, 2017; Gascón, 2013; Höckert; 2015).

Kieffer (2018) indica que el escaso conocimiento del funcionamiento de estos procesos participativos en el TRC amerita la necesidad de profundizar en su estudio a través de la etnografía. Asumiendo este reto, el presente artículo analiza un programa de cooperación en turismo en una zona rural del Norte de Ecuador (Valle de Manduriacos, provincia de Imbabura), impulsada por una organización de base con el apoyo de una organización no gubernamental de desarrollo extranjera. En determinado momento, parte de la población local valoró ciertos aspectos de la propuesta de intervención sobre las que albergaban dudas, aunque ya había sido diseñada y financiada.

El objetivo del presente artículo es descubrir cómo funcionan los procesos participativos en el TRC, y si, como algunos autores aducen, en ocasiones son un simple ritual vacío de contenido (Gascón, 2013). Nos preguntamos cuándo y de qué manera sucede esto. En el caso etnográfico que nos ocupa, veremos si las incertidumbres detectadas frente al proyecto de TRC se materializaron en cambios y de qué manera se produjeron. Adelantemos conclusiones: hubo discusión, que se encauzó a través de un proceso formal de análisis participativo y de conversaciones informales. Pero esto solo fue posible porque, además de capital social, la población tenía conocimientos sobre el sector de intervención: previamente al proyecto se había implementado un programa de Turismo Solidario que dio suficiente información a la población como para identificar posibles riesgos.

El caso del Valle de Manduriacos, por tanto, muestra que los procesos participativos solo son posibles si se tiene suficiente conocimiento del sector económico sobre el que se quiere intervenir. Pero también, que no solo tienen lugar en espacios formalmente establecidos y a través de técnicas estructuradas. El debate informal entre miembros de la población local, y entre población local y técnicos, creó los relatos que, en los espacios formales de participación, se pusieron en común. Finalmente, el proyecto sufrió transformaciones sustanciales. Un cambio en el contexto de la cooperación española (la crisis de 2007 redujo drásticamente los fondos de ayuda al desarrollo), que financiaba el proyecto, obligó a una reestructuración presupuestaria y de las actividades previstas. Si esta reestructuración se realizó de una manera y no de otra, fue resultado de esas dudas y debates formal e informalmente planteados.

El estudio se ha realizado desde el paradigma de la Resiliencia Socio-Ecológica (RSE). El concepto de *Resiliencia* surgió en la década de 1970 en el ámbito de las ciencias naturales, pero posteriormente se aplicó a los sistemas sociales vinculados a los ecosistemas. RSE hace referencia a la capacidad de un sistema para adaptarse al cambio: un sistema socioecológico es resiliente si es capaz de mantener la conexión entre sus elementos

en ese proceso de transformación. Escalera y Ruiz Ballesteros (2011) hablan de «conservación creativa»: ante algún tipo de estrés, una sociedad mostrará RSE si es capaz de adaptarse sin alterar sustancialmente su forma y funciones. Pero no se trata de una estrategia exclusivamente reactiva ante una situación incontrolable. RSE implica que la sociedad local es capaz de negociar el proceso de adaptación. La forma en la que la sociedad local se transforma depende de su capital social, de sus mecanismos de inclusión (Adger, 2000), y de la flexibilidad de su estructura organizativa comunitaria (Olsson, Folke y Berkes, 2004) y doméstica (Díaz-Aguilar y Escalera-Reyes, 2020; Ruiz-Ballesteros y Ramos-Ballesteros, 2019).

A lo largo de la década de 2010, se ha consolidado la utilización de la RSE para analizar el turismo en zonas rurales, y el TRC en particular (Cochrane, 2010; Espeso-Molinero y Pastor-Alfonso, 2020; Lew, 2014; entre otros). Su utilidad se debe a que el turismo, ya sea una propuesta endógena o impulsada por agentes externos, implica cambios en el modelo de producción, en las estructuras organizativas, y en los nuevos usos del ecosistema. La utilización del turismo en la cooperación al desarrollo con el objetivo de consolidar las sociedades rurales a través de estas transformaciones nos obliga a preguntarnos por sus consecuencias. La RSE tiene fuerza explicativa para analizar estos procesos (Luthe y Wyss, 2014; Ruiz-Ballesteros, 2011). El caso etnografiado permitirá observar de qué manera los procesos participativos son útiles, o no, en la consolidación de la RSE de un grupo social cuando se enfrenta a una intervención que busca cambiar la estructura económica local al introducir un nuevo sector, el turismo.

El artículo describe, inicialmente, las características sociales y económicas del Valle de Manduriacos. A continuación, se expone cómo las organizaciones participantes en el programa de cooperación se introdujeron en la cooperación en turismo. Lo hicieron a través del Turismo Solidario o *Volunteer Tourism*: un tipo de viaje organizado que se caracteriza por destinar el tiempo de ocio a actividades altruistas como la recuperación de espacios naturales, la restauración de patrimonio material o la participación en acciones a favor de poblaciones desfavorecidas (Higgins-Desbiolles, 2009; Lyons y Wearing, 2008). No fue un caso excepcional. En los años 1990 y 2000, muchos agentes de la cooperación incluyeron el turismo en sus líneas de actuación a través del Turismo Solidario. Era habitual que Turismo Solidario y Turismo Rural Comunitario estuvieran estrechamente relacionados (Gascón, 2009). El caso que nos ocupa es un ejemplo de ello. Veremos, finalmente, cómo se diseñó el programa de TRC y los problemas que enfrentó su ejecución, que impulsó un proceso participativo que llevó a cambiar su diseño.

Metodología

El caso analizado tuvo lugar en la década de 2000. La mayor parte de la información se obtuvo en ese periodo, y se completó posteriormente, entre 2018 y 2020, a través de entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales con agentes y líderes locales que habían participado en el proceso, y mediante la revisión de los archivos del programa de cooperación estudiado.

La información obtenida durante la década de 2000 se consiguió aplicando dos tipos de metodologías cualitativas. Por un lado, la investigación etnológica, dirigida a conocer y comprender el comportamiento social de una determinada población utilizando técnicas como la observación participativa y la realización de entrevistas semiestructuradas. Este método permite analizar el discurso de los individuos en relación con su contexto social, histórico e ideológico.

También se obtuvo información a través métodos de investigación participativo; concretamente, el Diagnóstico Rural Participativo (DRP). DRP es un conjunto de enfoques y herramientas cualitativas que permiten a la población local compartir, recopilar y analizar información sobre su vida y condiciones para planificar acciones futuras (Chambers, 1994). El objetivo es que sea la propia población, a través del debate, quien oriente la planificación, la ejecución y el seguimiento de los proyectos de cooperación al desarrollo. Fue la organización que actuaba como socio local del proyecto quien organizaba los talleres participativos en los que se aplicaban el DRP. Se trata de una entidad de base, conformada y gestionada por la propia población del Valle, que aplicaba estas técnicas con regularidad, en paralelo a las asambleas y reuniones de equipo más convencionales. Estos talleres se hacían a nivel de cada comunidad. Las técnicas de DRP consideraban factores que establecían diferentes intereses, como el género, la localidad y la capacidad económica, y eran coordinados por técnicos y activistas de la entidad que conocían estas metodologías, con el apoyo ocasional de técnicos expatriados de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) que la apoyaban. Encubierto bajo estructuras formalmente igualitarias, no toda la población tiene la misma capacidad de incidencia en los procesos participativos y espacios asamblearios (Cooke y Kothari, 2001). No obstante, los problemas y dudas del proyecto de TRC sí se plantearon en estos espacios de discusión.¹

1. Aunque no es el objeto del presente artículo, el marginal papel de la mujer en las tomas de decisiones demuestra esta situación. Inicialmente, la CTGV había surgido como una organización dirigida a crear trabajo femenino, y no despertó el interés de los hombres. Cuando empezó a recibir apoyo internacional y se convirtió en el principal agente político

El Valle de Manduriacos

El Valle de Manduriacos, situado en la Reserva Ecológica Cotacachi-Chayapas, forma parte del cantón Cotacachi. Se trata del cantón más extenso de los seis que conforman la provincia de Imbabura, en el Norte de Ecuador. Cotacachi se sitúa entre los 200 y los casi 5.000 m de altitud sobre el nivel del mar, lo que supone una gran variedad de ecosistemas: desde la alta montaña andina hasta el bosque tropical. En líneas generales, las características topográficas y climáticas del cantón permiten diferenciar dos zonas: la andina y la subtropical, conocida como Intag, y a la que pertenece Manduriacos. En la década de 2000, cuando tuvo lugar el proceso que describiremos a lo largo del artículo, la población del cantón no llegaba a las 38.000 personas, de las cuales casi 30.000 vivían en zonas rurales. La población de Intag era toda rural, y ascendía a 12.087 habitantes (INEC, 2020).

Cubierto de bosques tropicales primarios y atravesado por numerosos ríos, el Valle de Manduriacos es una zona recientemente poblada. Deshabitada tras la debacle demográfica que supuso la conquista española, solo a mediados del siglo XX pequeños grupos campesinos procedentes de diferentes zonas del Ecuador y del Sur de Colombia empezaron un tímido proceso de colonización. Resultado de ello, la población la conforma una amalgama de contingentes afroecuatorianos, indígena-amazónicos, indígena-andinos, mestizos y criollos (López Oropeza, 2011). Se trató de una colonización espontánea, no planificada por el Estado, por lo que el Valle siempre ha padecido escasez de servicios públicos: aunque su población se movía alrededor de los 4.000 habitantes, solo a finales de la década de 1990 se estableció un puesto sanitario, y hasta finales de la década siguiente careció de una escuela de secundaria. La red vial también sufría estas limitaciones. En el periodo que nos ocupa, el Valle solo tenía una entrada: una carretera de tierra que en tiempos de lluvia se convertía en un lodazal. Este camino llegaba a San José de Magdalena, la comunidad que fungía como capital informal del Valle. Las doce comunidades que conforman el Valle estaban mal comunicadas: la mayoría solo podían transportar sus mercancías a lomos de mula, en viajes que podían durar seis o siete horas hasta San José².

del Valle, las mujeres que asumían los cargos directivos fueron sustituidas por hombres. Por presión de las ONGD que trabajaban con la CTGV, se estableció una Junta Directiva paritaria. Sin embargo, en las reuniones de la Junta su presencia era testimonial: solían ocupar los asientos del fondo y raramente participaban en las deliberaciones. Esta situación se repetiría en las asambleas comunitarias.

2. En el mundo andino, «comunidad» hace referencia a una estructura institucional que rige las poblaciones y territorios y que, a la vez, es extraordinariamente heterogénea y adap-

La principal actividad económica de la zona era la agropecuaria, como continúa siendo actualmente. Pero a mediados de la década de 2000 se había reducido, aunque los terrenos eran fértiles y permitían cultivos diversos. Esto se debió, por un lado, a la crisis general de la agricultura en el país, víctima de actividades como el *dumping*, que hacía que el mercado interno ecuatoriano estuviera copado por productos foráneos en detrimento de la producción autóctona (Acosta y Serrano, 2009). Por otro, a la dificultad de colocar la producción en los mercados por las limitaciones viales antes explicadas. La crisis financiera, social y política que sufrió Ecuador en la década de 1990 e inicios de la siguiente, resultado de la corrupción política, la aplicación del modelo económico neoliberal y la falta de planificación del desarrollo, ayudó también a este proceso (Vos, 2000). Otra causa fue la emigración de la población con mayor capacidad productiva (Altamirano, 2003). Como ya hemos indicado, el Valle carecía de escuela de secundaria; esto también favoreció la emigración de los jóvenes a zonas urbanas.

La crisis facilitó la implantación de empresas extractivas de oro y otros minerales en Manduriacos y, en general, el territorio de Intag. Aun cuando los efectos medioambientales de esta actividad ponen en juego la viabilidad de la agricultura (contaminación de ríos y acuíferos, destrucción y erosión del suelo excavado, etc.), parte de la población lo consideró una opción³. De esta manera, en el Valle de Manduriacos se desarrollaron dos modelos económicos mutuamente excluyentes: uno cortoplacista y depredador, protagonizado por la minería, y otro que buscaba opciones productivas resilientes. Esta segunda opción estaba encabezada por una organización no gubernamental de base local conformada por campesinos, la Corporación Talleres del Gran Valle (CTGV). Inicialmente se trataba de una organización de carácter económico. Su objetivo programático era crear alternativas productivas y laborales en el Valle. Sin embargo, en el transcurso del debate y el conflicto productivo, la CTGV también acabó centrando y coordinando la resistencia a las actividades extractivas. A mediados de la década de 2000, la CTGV, con

table (Bretón Solo de Zaldívar, 2018). Por las características de Manduriacos, sociedad conformada hace un par de generaciones con contingentes poblacionales diversos, el concepto *comunidad* no tiene estas características. En el texto hablamos de *comunidad* para referirnos a las entidades políticas inframunicipales, por tener esta denominación, y a las asambleas en las que, en este ámbito de organización territorial, toman decisiones de forma colectiva.

3. La actividad extractiva en Intag ha sido analizada en profundidad, al punto de convertirse en un ejemplo de este tipo de conflictos. Entre otros trabajos, se puede destacar Martínez-Alier (2001), Bebbington (2007), Walter, Latorre, Munda y Larrea (2016), Avci y Fernández-Salvador (2016), Avci (2017), Shade y Ramírez (2018) o Kneas (2021).

el apoyo de otros agentes del cantón y foráneos, había conseguido impedir que el lavado del oro se realizase en el Valle y contaminase los ríos y acuíferos por el uso de metales pesados, pero no había podido paralizar la explotación del yacimiento.

Desde mediados de la década de 1990, el cantón de Cotacachi protagonizaba una experiencia de democracia participativa que permitía a la sociedad civil intervenir en las tomas de decisiones municipales⁴. La Asamblea de Unidad Cantonal, órgano de participación que agrupaba las organizaciones del cantón, fue resultado de este proceso. El Municipio y la Asamblea hicieron una apuesta a favor de un modelo de desarrollo sostenible opuesto a la minería. Esta postura se materializó en el Plan de Desarrollo del Cantón Cotacachi y en la consideración de Cotacachi como Cantón Ecológico (Sánchez Echevarría, 2014). La CTGV, que participaba activamente en estos procesos cantonales, se convirtió en la organización referente para el Valle de Manduriacos.

Turismo Solidario en el Valle

Desde inicios de la década de 2000, la CTGV, en consorcio con una ONGD catalana, Xarxa de Consum Solidari (XCS), organizaba viajes de Turismo Solidario en el Valle de Manduriacos. Estos viajes permitían al turista conocer las consecuencias de las relaciones Norte-Sur, tomando como ejemplo la realidad ecuatoriana. En concreto, y dadas las características programáticas de ambas organizaciones, introducían al viajero en la problemática de las relaciones comerciales internacionales y en las características de los movimientos del Comercio Justo y de la Soberanía Alimentaria.

La CTGV es una organización establecida en 1998 por la propia población campesina, con el objetivo de crear empresas de servicios y talleres artesanales sociales en el Valle de Manduriacos, y favorecer la comercialización de sus productos en el mercado regional y en el internacional de Comercio Justo. A inicios de la década de 2000, la CTGV se había convertido en la estructura organizativa más importante del Valle. La XCS había nacido un poco antes, en 1997, a iniciativa de diferentes organizaciones catalanas para impulsar el Comercio Justo. A mediados de la década de 2000 sus ámbitos de actuación eran cinco: la cooperación internacional, la importación y distribución de productos de Comercio

4. Este proceso también ha sido ampliamente analizado. Entre otros, se pueden destacar los trabajos de Báez, García, Guerrero y Larrea (1999), Cabannes (2004), Ortiz (2004), Cameron (2009) o Alvear Morales (2020 y 2021).

Justo, la educación para el desarrollo, la incidencia política, y el turismo responsable.

La relación entre ambas organizaciones se inició en 1999 y se consolidó en la década siguiente. Para la CTGV, la XCS era su principal socio del Norte, e igualmente, la mayor parte de los esfuerzos de la XCS en sus primeros años de vida se centró en el Valle de Manduriacos y en el fortalecimiento de la CTGV. Los planteamientos programáticos de ambas organizaciones, tanto en el ámbito del Comercio Justo como en el de Soberanía Alimentaria, se formaron conjuntamente en este proceso. En la práctica, la relación se materializaba a través de cuatro vías. Por un lado, mediante la importación y comercialización de productos de Comercio Justo: la XCS importaba y distribuía en España productos de la CTGV y otras organizaciones de Intag (artesanía de luffa, jabones naturales, café, derivados del maní, etc.). Por otro, a través de proyectos de cooperación internacional dirigidos a implementar nuevos talleres, formar a su personal, apoyar la comercialización local e internacional, o a la formación de líderes en temas municipalistas, medioambientales y de género. La XCS, a través de sus proyectos de cooperación y su equipo en terreno, también apoyaba las demandas legales y la lucha política que la CTGV y otras organizaciones de Cotacachi mantenían frente a las empresas mineras. El cuarto ámbito de relación entre ambas organizaciones fue el turismo. En un principio, organizando viajes de Turismo Solidario y, posteriormente, mediante un programa de Turismo Rural Comunitario. Más adelante haremos referencia a este programa, que adoptó el nombre de Hormiga Verde.

El programa de Turismo Solidario nació con el objetivo de consolidar la economía del Valle incrementando los ingresos y diversificando las actividades. El primer viaje se realizó en el verano de 2001. La XCS se dedicaba a organizar y hacer difusión de los viajes en el Estado español. La CTGV se encargaba de preparar la logística en Ecuador, tanto en el Valle de Manduriacos como en las demás zonas del recorrido. Durante el viaje, los turistas tenían la oportunidad de conocer una población campesina que, mediante organizaciones de base como la CGTV u otras como el Frente de Lucha por la Vida o la Coordinadora de Mujeres de Intag, trabajaban para mejorar su calidad de vida implementando actividades económicas social y medioambientalmente sostenibles. Los turistas se alojaban en albergues comunitarios y casas particulares. Los desplazamientos, que se hacían caminando o a lomos de mula, permitían conocer las características del bosque subtropical de boca de líderes y jóvenes guías locales. La relación entre la población y los turistas se facilitaba a través de diferentes actividades: reuniones con líderes, talleres artesanales, fiestas, competiciones deportivas, excursiones, etc. Los visitantes tenían la oportunidad de

conocer los conflictos medioambientales que la zona padecía por el impacto de la minería de oro, su rol en el proceso de democracia participativa del cantón, o sus esfuerzos por acceder al mercado con sus productos.

A mediados de la década de 2000, la CTGV y la XCS coordinaban tres viajes al año, en los meses de julio, agosto y septiembre. A su vez, la CTGV también organizaba otros viajes con una entidad francesa y promovía el Valle como destino turístico en el mismo Ecuador. Los viajes coordinados con la XCS establecían un número máximo de 16 turistas por grupo. Las entidades organizadoras consideraban que era el número máximo óptimo para ofrecer un buen servicio a los viajeros, no superar la capacidad de carga de la zona, y que la actividad generase el mayor ingreso posible. Este beneficio, como veremos más adelante, se gestionaba a través del Fondo Social de la CTGV.⁵

Además de los ingresos que el Turismo Solidario generaba en Manduriacos, su coordinación con otras entidades de Cotacachi, que también organizaban y se beneficiaban de parte de los recorridos de los turistas, permitió a la CTGV fortalecer sus relaciones institucionales y consolidar su papel como agente político en el cantón y en la lucha contra la minería. Cabe señalar que este programa turístico no era el único que se desarrolló durante esos años en Intag. De hecho, las organizaciones locales que se enfrentaban a la minería consideraban que un turismo autogestionado y respetuoso con el medioambiente podía ser un aliado en el debate sobre el modelo de desarrollo del territorio (Latorre, Walter y Larrea, 2015).

Del Turismo Solidario al proyecto de cooperación en turismo. El debate sobre la distribución de los beneficios

Las ganancias generadas por el programa de Turismo Solidario se destinaban al Fondo Social, que gestionaba la CTGV. Este fondo también se alimentaba de los beneficios obtenidos por los diferentes talleres y actividades de comercialización de la misma organización. La Asamblea del CTGV concretaba a qué acciones se destinaba el Fondo Social: rehabilitación de caminos y puentes, mejora de las infraestructuras educativas y sanitarias, construcción de espacios de ocio o culturales, ampliación de almacenes y talleres de la CTGV, etc. Su gestión corría a cargo de la Junta

5. Se entiende por *capacidad de carga turística* al máximo aprovechamiento que se puede realizar de los recursos sociales, económicos, culturales y medioambientales de un territorio para fines turísticos sin poner en riesgo la sostenibilidad de esos recursos o la satisfacción de los visitantes (Echamendi Lorente, 2001).

Directiva de la CTGV, formada por dos líderes, hombre y mujer, de cada comunidad del Valle.

El turismo también generaba ingresos de carácter individual. De manera indirecta, para los propietarios de economatos de la zona, donde los turistas adquirirían bebidas y otros productos. De forma directa, en concepto de remuneración, para el personal de los albergues (cuidadores y cocineros), los guías y los propietarios de mulas que se alquilaban para el desplazamiento de los viajeros. Y en concepto de beneficios, para los propietarios de las casas en las que se alojaban los turistas.

Los ingresos de carácter individual empezaron a generar una cierta crítica. Por un lado, se ponían en duda los criterios de selección del personal, que priorizaban, de forma más o menos explícita, a aquellos pobladores que participaban activamente en las iniciativas del CTGV. Por otro, se veía con recelo el alojamiento en casas particulares, ya que estos ingresos iban a parar a unas pocas familias: aquellas con cierta capacidad adquisitiva cuyos hogares ofrecían unas condiciones de confort mínimo para los visitantes.

A mediados de la década de 2000, el debate sobre el reparto de los beneficios del turismo se hizo explícito. El factor desencadenante fue un programa de cooperación que la XCS y la CTGV habían elaborado, destinado a impulsar el Turismo Rural Comunitario en el Valle: el programa Hormiga Verde. Ambas organizaciones consideraron que la experiencia de los viajes de Turismo Solidario había demostrado que Manduriacos tenía interés como destino para un determinado perfil de viajero, y que un turismo autogestionado podía ayudar a consolidar la estructura económica no-extractiva. De hecho, era una propuesta recurrente en las asambleas comunitarias, y que los dirigentes de la CTGV transmitían a su equipo técnico y al de la XCS.

Entre 2004 y 2005, a través diferentes reuniones y talleres de trabajo, se diseñó el programa Hormiga Verde. Hormiga Verde tendría cinco módulos: a) dotación de equipos (bicicletas de montaña para guías y turistas, material para los albergues, etc.); b) formación y capacitación de agentes turísticos (cocineras de albergues, guías, etc.); c) creación y adecuación de senderos y rutas; d) campaña de difusión del Valle de Manduriacos como destino turístico a nivel nacional e internacional; y e) mejora de las infraestructuras. Seguidamente, la XCS, con el apoyo de Sodepaz, otra organización española con la que tenía relaciones estrechas, empezó a buscar financiación. Entre 2005 y 2007, el programa recibió apoyo financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputació de Barcelona y, en menor medida, otros fondos de cooperación catalanes. El debate se centró en el último de los cinco módulos: la mejo-

ra de las infraestructuras. La propuesta que se había diseñado implicaba apostar por un determinado modelo turístico, y no se había sido consciente de lo que ello podía implicar.

El programa planteaba un modelo que conjugaba beneficios comunitarios e individuales. En concreto, se pretendía, a través de un fondo de microcréditos, ofrecer la posibilidad a la población de adecuar sus viviendas para alojar turistas de forma particular. Los sistemas mixtos de beneficios comunitarios e individuales no eran extraños en la CTGV, ni en los proyectos ejecutados con el apoyo de la XCS y otras ONGD. Si bien los talleres eran de propiedad de la CTGV y sus beneficios se destinaban a ampliar las actividades de la CTGV o a acciones de interés local a través del Fondo Solidario, las materias primas que necesitaban esos talleres se producían de forma particular en las explotaciones campesinas. La CTGV calculaba sus necesidades de materias primas, y establecía cuotas de compra a los campesinos que querían participar. Igualmente, los beneficios que la CTGV obtenía del acopio, preparación y comercialización de parte de la producción campesina se destinaba al Fondo Social, pero esta producción se realizaba también en las explotaciones minifundistas.

No obstante, el turismo es una actividad con características propias. El debate giró alrededor de una pregunta: ¿era factible aplicar para esta actividad el modelo mixto ya utilizado en otras de tipo productivo? Enfrentar esta pregunta se hizo necesario a medida que se incrementaba la crítica por el monopolio del alojamiento turístico particular en el Turismo Solidario. Si bien la crítica ya existía previamente, se volvió un tema recurrente cuando se conoció que el proyecto Hormiga Verde pretendía ofrecer microcréditos a aquellas familias interesadas en mejorar la vivienda para alojar turistas. Los técnicos de la CTGV y de la XCS fueron conscientes de esta reprobación. Por una parte, el temor a que el proyecto incrementase las diferencias socioeconómicas, y por otra, a que se pudiera convertir en un vector de conflictividad interna en un contexto de disputa latente con las actividades extractivas, llevó a ambas entidades a replantearse el modelo turístico. Para ello, iniciaron una labor de investigación-acción participativa. A través de conversaciones informales con diferentes agentes, debates en asambleas comunitarias y talleres en los que se aplicaron técnicas de Diagnóstico Rural Participativo, identificaron una serie de factores que abogaban por la ejecución del programa turístico tal como estaba diseñado:

- El modelo de beneficios mixtos (comunitarios y particulares) tenía una tradición en las acciones económicas realizadas por la CTGV, y funcionaba sin problema.

- La posibilidad de alojar en casas particulares, y de acceder a microcréditos para adecuar las casas, estaría abierta a todos los que quisieran participar. De hecho, la idea de los microcréditos no tenía tanto el objetivo de mejorar la calidad de la estancia de los visitantes, como la de permitir participar en esta actividad a familias interesadas en alojar turistas que no tenían la infraestructura indispensable requerida: una habitación adecuada, un baño acondicionado, etc.
- Este fondo de microcréditos, además, tendría una segunda consecuencia positiva: la mejora de la habitabilidad de las viviendas.
- No era posible establecer albergues en todas las comunidades, ya que se trataba de empresas costosas y muchas de estas infraestructuras, debido al factor estacional del turismo, estarían infrautilizadas la mayor parte del año.
- Además, algunas actividades turísticas que se venían realizando desde el inicio del programa turístico requerían contratar servicios particulares, como los servicios de guías o la contratación de mulas.
- Se podían presentar casos de éxito en Ecuador basados en un modelo turístico como el que se quería implementar.
- El turismo permitía consolidar el discurso de que era posible utilizar de forma sostenible los recursos naturales del Valle de Manduriacos, en un contexto de confrontación con la minería.

Por otro lado, también se detectaron riesgos en la aplicación de un modelo mixto en el programa turístico, y que ponían en debate, cada una de ella, los factores favorables a la ejecución del proyecto:

- Es cierto que el modelo de desarrollo propiciado tradicionalmente por la CTGV era mixto, pero nunca los medios de producción individuales/familiares (terrenos, equipamiento pesado...) recibieron apoyo de la cooperación para su mejora, como se proponía ahora con el programa de viviendas turísticas.
- No era del todo cierto que la posibilidad de alojar estuviese abierta a toda la población. La población del Valle no era homogénea social y económicamente, y el programa de microcréditos comportaba sesgos que podían marginar a amplios sectores. La mayoría no tenían una casa adecuada para recibir turistas, y no la tendrían, aunque las reformas fueran sustanciales. Además, seguramente se autoexcluirían del programa, porque los microcréditos comportan un riesgo financiero que solo podían asumir las familias con cierta

capacidad de generar excedentes⁶. En esta situación, la aplicación de un modelo mixto podía incrementar las diferencias socioeconómicas y facilitar la conflictividad interna, ya que el turismo, se suponía, había de ser una actividad de beneficio comunitario.

- Algunos técnicos de la XCS también observaron que el turismo podía estar generando demasiadas expectativas. Muchas familias podían tomar la decisión de endeudarse con los microcréditos en la confianza de que la CTGV sería capaz de atraer a Manduriacos una cantidad de turistas suficiente para que la inversión fuera rentable. Existía un serio riesgo de endeudamiento, de caer en un círculo vicioso de atracción de turistas por encima del número considerado óptimo para dar viabilidad a las inversiones privadas, o de tener que incrementar el trabajo de agencia de viajes la XCS y de la CTGV, labores que no estaban en sus objetivos programáticos.
- A la premisa de que no era posible construir albergues en todas las comunidades del Valle, se podía responder que no hacía falta que los turistas se alojasen en todas las comunidades: si los beneficios se destinaban al Fondo Social, las comunidades que no recibían visitas se verían igualmente favorecidas.
- A la premisa de que ya algunas actividades turísticas requerían contratar servicios (alquiler de mulas, mantenimiento de los albergues) que solo podían hacer particulares, se podía responder que no era lo mismo contratar servicios —que se han de considerar financieramente como costos— que repartir beneficios.
- Es cierto que había ejemplos exitosos de modelos mixtos de desarrollo turístico, pero también de otros que habían sido un fracaso. No hay modelos de turismo sostenible aplicables universalmente. El modelo a elegir tiene que tener en cuenta las características contextuales e internas de la sociedad anfitriona.

6. Los microcréditos generaron muchas expectativas en la década de 1990 en el ámbito de la cooperación internacional. Por una parte, permitían multiplicar el alcance de los fondos de ayuda al desarrollo, ya que el capital base de un proyecto era retornado y se podía destinar a otros. Por otro, facilitaba el empoderamiento económico de aquellos que lo recibían, huyendo de intervenciones asistenciales (Besley, 1995; Waller y Woodworth, 2001). En la década de 2000, sin embargo, se vieron sus limitaciones. Solo aquellos miembros con mayor capacidad adquisitiva tendían a aprovechar estos recursos, ya que quienes vivían en una pobreza más extrema no podían arriesgarse al fracaso o no tenían recursos con los que ofrecer garantía. Además, a menudo las actividades en las que se invertía el capital fracasaban, ya fuese porque no se habían diseñado correctamente, porque no habían tenido un acompañamiento adecuado, o porque las condiciones de mercado habían cambiado. Esta situación ahondaba la vulnerabilidad del sector al que se quería favorecer (Bateman, Blankenburg y Kozul-Wright, 2018; Gómez Gil, 2017).

- El turismo rural comunitario podía ser una columna en la que sustentar la economía local al aprovechar los recursos disponibles de forma sostenible, y una demostración de que el Valle cuenta con opciones para no depender del sector extractivo. Pero si el modelo turístico escogido incrementaba las diferencias sociales o generaba conflictos internos, la resistencia a la minería se podía debilitar.

Los pobladores más interesados en activar el fondo de microcréditos eran aquellos que ya alojaban turistas en sus casas dentro del programa de Turismo Solidario, y otros que veían que, con algunas mejoras en sus hogares, también podrían hacerlo. Aunque eran una minoría, tenían una representación importante en los órganos de gestión comunitaria, ya que algunos eran reconocidos líderes opositores al extractivismo. No es extraño: su apuesta por un turismo que basaba su principal atractivo en el exuberante ecosistema de Manduriacos estaba en riesgo por unas actividades que podían esquilmar el paisaje. El liderazgo, que en el Valle giraba primordialmente alrededor del conflicto minero, permitía acumular capital político. Un capital político que otorgaba la población y legitimaba las otras organizaciones del cantón y las ONGD extranjeras que trabajaban en el Valle, que los identificaban como los representantes naturales del territorio.

Por otra parte, su mejor situación económica, que se reflejaba en la posesión de unas viviendas aptas para el alojamiento turístico o en la capacidad de endeudarse con un fondo de microcréditos, también favorecía su mayor capacidad de incidencia política, al poseer una red más tupida de relaciones sociales. Algunos de ellos, además del trabajo agropecuario, se dedicaban a actividades comerciales o tenían alguna otra fuente de ingresos. En términos bourdianos, se puede afirmar que su capital económico repercutía en su capital social y político.

Aún con ello, en 2007 el debate continuaba abierto, y se seguía planteando en reuniones y talleres que se realizaban tanto en el Valle de Manduriacos como en Barcelona. Hasta no resolverlo, se optó por el principio de precaución: el módulo del proyecto destinado a implementar el fondo de crédito para acondicionamiento de viviendas para alojamiento turístico quedó postergado.

Finalmente, fue un factor externo el que terminaría con el debate: la crisis global que se inició a finales de 2007, y que en el Estado Español fue especialmente intensa. El colapso del sector constructivo, que vivía una burbuja inmobiliaria desde hacía décadas, arrastró al sector financiero, primero, y al resto de actividades económicas, después. Entre otras consecuencias, se generó una crisis de liquidez que afectó al gasto público, al

empresarial y al consumo privado. Se adoptaron medidas de recorte presupuestario sobre servicios básicos, mientras que el desempleo creció exponencialmente, los salarios se contrajeron y las ejecuciones hipotecarias se multiplicaron (Feria, 2018; Fernández Navarrete, 2016). La contracción del consumo incidió en el turismo emisor: entre 2007 y 2013, el número de desplazamientos internacionales en avión por vacaciones de verano por parte de residentes en España se redujo de 1.036.448 a 753.446⁷. Esto tuvo un impacto directo en el Turismo Solidario (Gascón, 2019). A la XCS le era cada vez más difícil organizar viajes con un número de turistas mínimo suficiente para que la actividad fuese rentable.

Por otro lado, los recortes en los presupuestos sociales, y especialmente en los de cooperación al desarrollo, fueron especialmente significativos. Los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo del Estado Español pasaron del 0,46% de la Renta Nacional Bruta al 0,12% entre 2009 y 2015. Este porcentaje era, exactamente, la mitad del que destinaba España en 1991, el año que entró a formar parte del OCDE⁸. Y dado el impacto de la crisis en familias y empresas, los fondos privados que llegaban a las ONGD también disminuyeron (Gómez Gil, 2011). Las ONGD tuvieron que reducir gastos operativos y de estructura. Muchas reestructuraron sus equipos técnicos y suprimieron las actividades no prioritarias; entre estas, la organización de viajes (Gascón, 2019). La XCS abandonó la línea de cooperación en turismo para centrar sus, ahora, magros recursos a aquellos proyectos que entraban en sus principios programáticos: el comercio justo y la soberanía alimentaria.

El programa Hormiga Verde se mantuvo un tiempo gracias a la financiación obtenida en años anteriores, pero se reformuló para dirigir fondos a necesidades más perentorias en el nuevo marco económico, ya que ahora, y al menos coyunturalmente, el turismo había dejado de ser una fuente de ingresos destacable. Además, la dependencia que la CTGV tenía de la cooperación española le obligó a reestructurar sus presupuestos para reforzar sus actividades en funcionamiento, y retrasó *sine die* las propuestas por iniciar.

Conclusión

El impulso del turismo en el Valle de Manduriacos, basado inicialmente en el Turismo Solidario y, después, en el TRC, iba dirigido a fortalecer la

7. Datos obtenidos de los datos estadísticos que ofrece la Secretaría de Estado de Turismo – Turespaña: <http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/familitur/informesdinamicos/paginas/analizar-la-ayuda/con-cuanto-se-ayuda>.

8. Dato obtenido de la web «La realidad de la ayuda», gestionada por OXFAM España: <http://www.realidadayuda.org/analizar-la-ayuda/con-cuanto-se-ayuda>.

economía campesina mediante dos estrategias: diversificar las actividades económicas de la zona e incrementar los ingresos económicos. Pero una parte sustancial de los habitantes se inquietó por el modelo turístico que se quería implementar. El turismo podía incrementar la diferenciación socioeconómica y, por ende, la conflictividad intracomunitaria. Esto podía afectar al posicionamiento mayoritario en el conflicto minero, un posicionamiento encabezado por la CTGV. Congelar el módulo de microcréditos del programa Hormiga Verde fue una estrategia encaminada a controlar este proceso, que ponía en riesgo la Resiliencia Socio-Ecológica del territorio. La creación de un fondo de microcréditos que, para muchos, impulsaría la concentración de los beneficios del turismo en unas pocas familias afines a la CTGV, podía menoscabar el frente antiextractivista.

El objetivo de estas decisiones no fue frenar el cambio. Toda la población estaba de acuerdo con el desarrollo turístico del Valle. Lo que se quería era fiscalizarlo para mantener la amplia, pero vulnerable, cohesión social que se había alcanzado frente a las actividades extractivas. Afirma Ruiz-Ballesteros (2009) que el TRC, en ocasiones, es una estrategia de cambio para mantener la identidad. La apuesta turística del Valle tuvo esta característica gatopardiana: la introducción de una nueva actividad no solo iba dirigida a mejorar la calidad de vida de los pobladores, sino también, y a través de ello, a mantener la cohesión y la identidad frente a propuestas desarrollistas que podían afectar el ecosistema. El debate sobre el modelo no se centró tanto en conseguir un reparto equitativo de unos ingresos que no se esperaban que fuesen significativos en la *ratio per capita*, sino a asegurar que el turismo consolidase la comunidad (*Gemeinschaft*) de dos maneras. Por un lado, destinando los beneficios a intereses colectivos (mejora de una carretera, construcción de un módulo escolar...). Por otro, haciendo frente a los cantos de sirena de la minería, afianzando la cohesión social, para lo que era necesario mantener las diferencias económicas a unos niveles aceptables por la población, reducir los riesgos de conflicto intracomunitario, y asegurar el funcionamiento y la legitimidad de sus estructuras organizativas.

La eliminación del módulo de microcréditos para la mejora de viviendas turísticas fue un triunfo relativo: algunos pobladores fueron capaces de capitalizarse sin apoyo externo y establecer sus propios negocios de hospedaje, absorbiendo en los siguientes años una parte sustancial de los beneficios de un turismo que había sido impulsado por la cooperación. Pero más allá de si se logró o no controlar el desarrollo turístico, el proceso mostró la eficacia de las metodologías participativas. Como hemos explicado en la introducción, la RSE depende del capital social y de las

características de las estructuras organizativas. A partir de ello, se ha afirmado que los métodos participativos pueden ayudar a consolidar la RSE en iniciativas de transformación como los proyectos de desarrollo (Stringer, Dougill, Fraser, Hubacek, Prell y Reed, 2006). En Manduriacos, esos procesos, por una parte, permitieron detectar los pros y contras de uno y otro modelo turístico. Por otra, demostraron que esos riesgos podían ser gestionados a través de mecanismos participativos formales e informales. Como afirma la bibliografía sobre procesos participativos en la cooperación al desarrollo (Bustamante, García Burgos, Gilsanz, Llanos y Toledano, 2019), esto fue posible por la existencia de estructuras organizativas y de capital social. Las primeras, creadas para implementar proyectos productivos y organizar el territorio; el segundo, acumulado después de años de lucha contra la minería, experta en la aplicación de estrategias destinadas a dividir los intereses de la población.

Sin embargo, el caso del Valle de Manduriacos también muestra los límites de los procesos participativos. Su aplicación no está exenta de dificultades. Por ejemplo, cuando esta transformación se basa en la introducción de nuevas actividades económicas, cuya lógica y funcionamiento es desconocido por la población local. Así sucede cuando se propone una intervención en turismo en un territorio tradicionalmente dedicado a la actividad primaria: por muy democrático que se plantee el proceso de toma de decisiones, la inexperiencia puede convertir los mecanismos de participación en rituales vacíos de contenido que solo sirvan para legitimar las decisiones de quienes tienen más información o mayor poder (Butcher, 2007; Mowforth y Munt, 2015).

No obstante, la población de Manduriacos fue consciente de los riesgos del proyecto turístico tal como estaba concebido inicialmente. El desconocimiento de las características del turismo, sector económico reciente, podría haber llevado a dar por bueno un modelo de proyecto similar a aquellos que, relacionados con el sector agrario, ya se habían implementado exitosamente, y en los que se combinaban beneficios particulares con otros destinados al Fondo Social. Fue el programa de Turismo Solidario, que se basaba en el alojamiento particular de los visitantes y que funcionó durante unos años antes del diseño del proyecto Hormiga Verde, el que evidenció los riesgos del proyecto. Es decir, se cumplió la máxima de que un proceso participativo real no solo requiere capital social y estructuras organizativas; también conocimiento del sector de la intervención. Sin ese conocimiento, los procesos participativos pueden convertirse en un ejercicio de legitimación de la intervención, pero sin implicación real de su población meta (Bello, Lovelock y Carr, 2017; Gascón, 2015; Höckert; 2015). Es decir, de un significante sin significado.

Referencias

- Acosta, A. y Serrano, A. (2009). Ecuador frente a la crisis económica internacional: un reto de múltiples aristas. *Polémika*, 1(1): 145-167.
- Adger, W.N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3): 347-364.
- Altamirano, T. (2003). El Perú y el Ecuador: Nuevos países de emigración. *Aportes Andinos*, 7. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Alvear Morales, C.G. (2021). El gobierno civil de la participación en Cotacachi antes y durante la constitución de 2008. *Chakiñan, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 14: 95-111.
- Alvear Morales, C.G. (2020). La planificación participativa en Cotacachi: ¿Espacio estatal o ciudadano? (1996-2018). *UNESUM - Ciencias: Revista Científica Multidisciplinaria*, 4(1): 155-168.
- Avcı, D. (2017). Mining conflicts and transformative politics: A comparison of Intag (Ecuador) and Mount Ida (Turkey) environmental struggles. *Geoforum*, 84: 316-325.
- Avcı, D. y Fernández-Salvador, C. (2016). Territorial dynamics and local resistance: Two mining conflicts in Ecuador compared. *The Extractive Industries and Society*, 3(4): 912-921.
- Bateman, M.; Blankenburg, S. y Kozul-Wright, R. (Eds.) (2018). *The rise and fall of global microcredit: Development, debt and disillusion*. Abingdon, OX: Routledge.
- Báez, A.L. y Acuña, A. (2003). *Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en áreas protegidas*. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
- Báez, S.; García, M.; Guerrero, F. y Larrea, A.M. (1999). *Cotacachi: Capitales comunitarios y propuestas de desarrollo local*. Quito: Abya Yala.
- Bebbington, A. (2007). *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: Una ecología política de transformaciones territoriales*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Bello, F.G.; Lovelock, B. y Carr, N. (2017). Constraints of community participation in protected area-based tourism planning: The case of Malawi. *Journal of Ecotourism*, 16(2): 131-151.
- Besley, T. (1995). Nonmarket Institutions for Credit and Risk Sharing in Low-Income Countries. *Journal of Economic Perspectives*, 9(3): 115-127.
- Blackstock, K. (2005). A critical look at community-based tourism. *Community Development Journal*, 40(1): 39-49.
- Bretón Solo de Zaldívar, V. (2018). La comunidad andina revisitada: Cuestión agraria y cuestión indígena en Chimborazo. *Ecuador Debate*, 103: 159-173.
- Bustamante, S.; García Burgos, J.; Gilsanz, J.; Llanos, M. y Toledano, J.M. (2019). *Enfoques y herramientas participativas en la cooperación para el desarrollo*. Madrid: CIDEAL.
- Butcher, J. (2007). *Ecotourism, NGOs and Development*. Abingdon: Routledge.
- Cabannes, Y. (2004). Participatory budgeting: a significant contribution to participatory democracy. *Environment and urbanization*, 16(1): 27-46.
- Cameron, J.D. (2009). 'Development is a bag of cement': The infrapolitics of participatory budgeting in the Andes. *Development in Practice*, 19(6): 692-701.

- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World development*, 22(7): 953-969.
- Cochrane, J. (2010). The sphere of tourism resilience. *Tourism Recreation Research*, 35(2): 173-185.
- Cooke, B. y Kothari, U. (Eds.) (2001). *Participation: The new tyranny?* London: Zed Books.
- Díaz-Aguilar, A.L. y Escalera-Reyes, J. (2020). Family Relations and Socio-Ecological Resilience within Locally-Based Tourism: The Case of El Castillo (Nicaragua). *Sustainability*, 12(15): 5886.
- Echamendi Lorente, P. (2001). La capacidad de carga turística: Aspectos conceptuales y normas de aplicación. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 21: 11-30.
- Elbers, W.; Knippenberg, L. y Schulpen, L. (2014). Trust or control? Private development cooperation at the crossroads. *Public Administration and Development*, 34(1): 1-13.
- Escalera, J. y Ruiz Ballesteros, E. (2011). Resiliencia Socioecológica: aportaciones y retos desde la Antropología. *Revista de Antropología Social*, 20: 109-135.
- Espeso-Molinero, P. y Pastor-Alfonso, M.J. (2020). Governance, Community Resilience, and Indigenous Tourism in Nahá, Mexico. *Sustainability*, 12(15): 5973.
- Faria, D.M; e Hidalgo, M. (2012). Desarrollo, turismo y pobreza: Una mirada crítica. *Estudios Turísticos*, 192: 71-88.
- Feria, J.M. (2018). Crecimiento urbano, crisis inmobiliaria y planificación metropolitana en España. *Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales*, 50(198): 651-669.
- Fernández Navarrete, D. (2016). La crisis económica española: Una gran operación especulativa con graves consecuencias. *Estudios Internacionales*, 48(183): 119-151.
- Fletcher, R. (2009). Ecotourism Discourse: Challenging the Stakeholders Theory. *Journal of Ecotourism*, 8(3): 269-285.
- Gascón, J. (2019). History of NGDO volunteer tourism in Spain: Depoliticisation, commodification, and downturn. *Journal of Tourism History*, 11(3): 284-302.
- Gascón, J. (2015). Pro-poor tourism as a strategy to fight rural poverty: A critique. *Journal of Agrarian Change*, 15(4): 499-518.
- Gascón, J. (2013). The limitations of community-based tourism as an instrument of development cooperation: The value of the Social Vocation of the Territory concept. *Journal of Sustainable Tourism*, 21(5): 716-731.
- Gascón, J. (2009). *El turismo en la cooperación internacional*. Barcelona: Icària.
- Gascón, J. (2005). *Gringos como en sueños: Diferenciación y conflicto campesino en los Andes peruanos ante el desarrollo del turismo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Gascón, J. y Cañada, E. (2005). *Viajar a todo tren: Turismo, desarrollo y sostenibilidad*. Barcelona: Icària.
- Gascón, J.; Morales, S y Tresserras, J. (Eds.) (2013). *Cooperación en turismo: Nuevos desafíos, nuevos debates*. Barcelona: Foro de Turismo Responsable.
- Gizelis, T.I. y Kosek, K.E. (2005). Why humanitarian interventions succeed or fail: The role of local participation. *Cooperation and Conflict*, 40(4): 363-383.
- Gómez Gil, C. (2017). *El colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo*. Madrid: Los libros de la Catarata.

- Gómez Gil, C. (2011). Diagnósticos de una cooperación en crisis y de la crisis de la cooperación en España. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, 113: 35-44.
- Higgins-Desbiolles, F. (2009). International solidarity movement: A case study in volunteer tourism for justice. *Annals of Leisure Research*, 12(3&4): 333-349.
- Höckert, E. (2015). *Ethics of hospitality: Participatory tourism encounters in the northern highlands of Nicaragua*. Rovaniemi: University of Lapland.
- INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos (2020). Censo de población y vivienda 2001. En <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/>. Consultado el 12 de enero de 2021.
- Kieffer, M. (2018). Turismo Rural Comunitario y organización colectiva: un enfoque comparativo en México. *Pasos*, 16(2): 429-441.
- Kneas, D. (2021). Cattle in the cane: Class formation, agrarian histories, and the temporalities of mining conflicts in the Ecuadorian Andes. *The Journal of Peasant Studies*, 48(4): 754-777.
- Lacher, R.G. y Nepal, S.K. (2010). Dependency and development in Northern Thailand. *Annals of Tourism Research*, 37(4): 947-968.
- Lash, G.Y.B. y Austin, A.D. (2003). *Rural Ecotourism Assessment Program (REAP): A guide to community assessment of ecotourism as a tool for sustainable development*. EplerWood International.
- Latorre, S.; Walter, M. y Larrea Maldonado, C. (2015). *Intag, un territorio en disputa: Evaluación de escenarios territoriales extractivos y no extractivos*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar; ICTA - Universidad Autónoma de Barcelona; Abya Yala.
- Lew, A.A. (2014). Scale, change and resilience in community tourism planning. *Tourism Geographies*, 16(1): 14-22.
- López Oropeza, M. (2011). Entre la identidad y la ruptura territorial: La construcción socio-histórica y socio-económica en Intag. Tesis de Máster no publicada. Flacso - Sede Ecuador.
- Luthe, T. y Wyss, R. (2014). Assessing and planning resilience in tourism. *Tourism Management*, 44: 161-163.
- Lyons, K. y Wearing, S. (Eds.) (2008). *Journeys of Discovery in Volunteer Tourism*. Oxfordshire: CABI.
- Martínez-Alier, J. (2001). Mining conflicts, environmental justice, and valuation. *Journal of Hazardous Materials*, 86(1&3): 153-170.
- Matarrita-Cascante, D. (2010). Beyond Growth: Reaching Tourism - Led Development. *Annals of Tourism Research*, 37(4): 1141-1163.
- Michael, M.; Mgonja, J.T. y Backman, K.F. (2013). Desires of community participation in tourism development decision making process: A case study of Barabarani, Mto Wa Mbu, Tanzania. *American Journal of Tourism Research*, 2(1): 84-94.
- Morales Morgado, H.F. (2006) Turismo comunitario: una nueva alternativa de desarrollo indígena. *AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana*, 1(2): 249-264.
- Mowforth, M. y Munt, I. (2015). *Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World*. London: Routledge.

- Notzke, C. (2006). *The stranger, the native and the land: Perspectives on indigenous tourism*. Concord: Captus University Press.
- Olsson, P.; Folke, C. y Berkes, F. (2004). Adaptive comanagement for building resilience in social-ecological systems. *Environmental management*, 34(1): 75-90.
- Ortiz, S. (2004). *Cotacachi: Una apuesta por la democracia participativa*. Quito: Flacso.
- Pérez Galán, B. y Asensio, R. (2012). Introducción. En *¿El turismo es cosa de pobres? Patrimonio cultural, pueblos indígenas y nuevas formas de turismo en América Latina*. B. Pérez Galán y R. Asensio, Eds. El Sauzal, Tenerife: ACA; PASOS, RTPC; Instituto de Estudios Peruanos.
- Rasoolimanesh, S.M.; Ringle, C.M.; Jaafar, M. y Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents' perceptions, community participation and support for tourism development. *Tourism management*, 60: 147-158.
- Ruiz-Ballesteros, E. (2015). Turismo de base local y comunidad: ¿Una vinculación oportuna? *Revista Andaluza de Antropología*, 8: 19-44.
- Ruiz-Ballesteros, E. (2011). Social-ecological resilience and community-based tourism: An approach from Agua Blanca, Ecuador. *Tourism Management*, 32(3): 655-666.
- Ruiz-Ballesteros, E. (2009). El Turismo Comunitario desde la perspectiva de la resiliencia socio-ecológica. En *Cultura, Comunidad y Turismo: Ensayos sobre el turismo comunitario en Ecuador*. E. Ruiz-Ballesteros y M.A. Vintimilla, Eds. Quito: Abya-Yala.
- Ruiz-Ballesteros, E. y Ramos-Ballesteros, P. (2019). Social-ecological resilience as practice: A household perspective from Agua Blanca (Ecuador). *Sustainability*, 11(20): 5697.
- Sánchez Echevarría, S. (2014). Cotacachi, Cantón Ecológico: Una aproximación urbana a la problemática socio ambiental: Discursos y prácticas de política pública en la relación global-local. Tesis de licenciatura no publicada, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Scheyvens, R. (2007). Exploring the tourism-poverty nexus. *Current issues in tourism*, 10(2-3): 231-254.
- Setiyorini, H.P.D.; Andari, R. y Masunah, J. (2019). Analysing factors for community participation in tourism development. *Tourism and Hospitality Essentials Journal*, 9(1): 39-44.
- Shade, L. y Ramírez, D.J. (2018). The Strategic Resources-Criminalization Nexus: Ecuador's Intag Zone. *Human Geography*, 11(1): 1-18.
- Spenceley, A. y Meyer, D. (2012). Tourism and poverty reduction: Theory and practice in less economically developed countries. *Journal of Sustainable Tourism*, 20(3): 297-317.
- Stringer, L.C.; Dougill, A.J.; Fraser, E.; Hubacek, K.; Prell, C. y Reed, M.S. (2006). Unpacking «participation» in the adaptive management of social-ecological systems: A critical review. *Ecology and society*, 11(2): 39.
- Tucker, H. (2010). Peasant-Entrepreneurs: A Longitudinal Ethnography. *Annals of Tourism Research*, 37(4): 927-946.
- Vos, R. (2000). *Ecuador 1999: Crisis económica y protección social*. Quito: Abya Yala.
- Waller, G.M. y Woodworth, W. (2001). Microcredit as a grass-roots policy for international development. *Policy Studies Journal*, 29(2): 267-282.
- Walter, M.; Latorre, S.; Munda, G. y Larrea, C. (2016). A social multi-criteria evaluation approach to assess extractive and non-extractive scenarios in Ecuador: Intag case study. *Land Use Policy*, 57: 444-458.

- Wearing, S.; McDonald, M. y Ponting, J. (2005). Building a Decommodified Research Paradigm in Tourism: The Contribution of NGOs. *Journal of Sustainable Tourism*, 13(5): 424-437.
- Wieckardt, C.E.; Koot, S. y Karimasari, N. (2022). Environmentality, green grabbing, and neoliberal conservation: The ambiguous role of ecotourism in the Green Life privatised nature reserve, Sumatra, Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(11): 2614-2630.
- WWF (2001). *Guidelines for community-based ecotourism development*. Gland, Switzerland: WWF International.
- Zielinski, S.; Kim, S.I.; Botero, C. y Yanes, A. (2020). Factors that facilitate and inhibit community-based tourism initiatives in developing countries. *Current Issues in Tourism*, 23(6): 723-739.
- Zorn, E. y Farthing, L.C. (2007). Communitarian Tourism: Hosts and Mediators in Peru. *Annals of Tourism Research*, 34(3): 673-689.

